

15 de junio de 2026

Estimados Presidente Raúl Mulino;
Ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó, y;
Ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro,

Las organizaciones internacionales abajo firmantes, estamos sumamente preocupados por la posible reapertura de la mina Cobre Panamá. La mina, propiedad de la minera canadiense First Quantum Minerals ha estado suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia en Panamá [dictaminó](#) que el contrato de la mina era inconstitucional. Debido a la opinión popular en contra de la industria minera en el país y sus efectos nocivos, el presidente de Panamá de ese entonces, Laurentino Cortizo, decretó una [moratoria](#) minera prohibiendo la aprobación de nuevos contratos mineros.

En los primeros meses de [2024](#), varias empresas y proveedores mineros empezaron a recurrir al sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, o ISDS por sus siglas en inglés. Este sistema permite a las empresas transnacionales demandar al estado cuando sienten que sus intereses han sido afectados por medidas tomadas por instancias del Estado. Lo que buscan es exigir indemnizaciones por sus inversiones realizadas, así como por sus expectativas de ganancias futuras. Los procesos de arbitraje o la amenaza de arbitraje puede influir o presionar al Estado con el objetivo de revertir sus decisiones, o para que se tomen decisiones que favorecen sus negocios. Es lo que se llama el “efecto disuasorio” o “efecto congelador”, debido a que pueden paralizar las decisiones estatales que consideran perjudiciales a sus intereses, sin importar si estas decisiones son en favor del medio ambiente o el interés común. Las empresas transnacionales pueden recurrir al arbitraje aún cuando han sido sancionadas por las cortes del país, tal como sucede en el [caso](#) de la mina Cobre Panamá.

En este caso, actualmente siguen pendientes demandas por más de 25 miles de millones de dólares de las empresas canadienses [First Quantum Minerals](#) y [Franco Nevada](#), y de la empresa surcoreana Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources ([KOMIR](#)). Frente a estas demandas multimillonarias, el nuevo Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, [dijo](#) que estaría dispuesto a negociar con First Quantum Minerals si suspendieran la demanda. Esto es altamente preocupante y demuestra cómo este mecanismo de arbitraje está siendo utilizado para abrir negociaciones bajo coacción, con el objetivo de socavar la autoridad y fallo de la Corte Suprema de 2023, y para vulnerar la voluntad del pueblo panameño que ha manifestado una y otra vez que la minería dañina no es el tipo de desarrollo que quieren en su país.

Las operaciones de First Quantum Minerals y sus socios en el país han generado [protestas](#) a nivel nacional, dos [fallos](#) judiciales en contra de sus contratos, [violaciones](#) de derechos humanos, y varias sanciones por infracciones ambientales¹. A pesar de esto, intentan presionar

¹ Resoluciones DRCC-053-10-2020 de 1 de octubre de 2020, DRCC-057-10-2020 de 1 de octubre de 2020; DRCC-056-10-2020 de 1 de octubre de 2020, DRCC-059-10-2020 de 2 de octubre de 2020,

al gobierno panameño a reabrir la mina con el uso de un sistema de arbitraje exclusivo e injusto. Al respecto, David Boyd, durante su mandato como Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas, [dijo](#) que “tiene consecuencias devastadoras para una gran cantidad de derechos humanos, creando daños que experimentan de forma desproporcionada las poblaciones vulnerables y marginadas”, y ha sido “una [catástrofe](#) para el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y decisiones sobre permisos relacionados con el medio ambiente necesarios para abordar la crisis planetaria”.

Por todo esto, hacemos un llamado al gobierno panameño a:

1. Trabajar con la sociedad civil y las comunidades aledañas a la concesión de First Quantum Minerals para crear un plan de cierre seguro y definitivo para la mina Cobre Panamá;
2. Respetar el fallo de la Corte Suprema de 2023 y la moratoria minera, e insistir que las empresas mineras que operan en el país, como First Quantum Minerals, también respeten las leyes nacionales. Eso incluye la denegación de un nuevo contrato o la reapertura bajo cualquier otro modelo administrativo;
3. Rechazar cualquier intento para reabrir la mina, ya sea por medio de demandas de mil millones de dólares que presionan al gobierno a negociar o por otras formas.

La población panameña ha expresado, por varios años ya, su claro rechazo de la minería en el país. El gobierno panameño debe respetar la voluntad del pueblo, y así también garantizar el respeto a las decisiones de la Corte Suprema, de sus leyes adoptadas soberanamente, así como la moratoria minera y sus regulaciones.

Atentamente,

1. Asamblea Jáchal No Se Toca
2. Attac Québec
3. Balance & Accuracy in Journalism
4. Bios Iguana A.C.
5. Canadian Network for Corporate Accountability
6. Climate Action Network Canada (CAN-Rac)
7. Coal Action Network
8. CoDevelopment Canada
9. Colectivo CASA
10. Colectivo Voces Ecológicas (Covec)
11. Columbia Center on Sustainable Investment
12. Common Frontiers

DRCC-062-10-2020 de 5 de octubre de 2020, DRCC-064-10-2020 de 5 de octubre de 2020, DRCC-054-10-2020 de 1 de octubre de 2020, DRCC-058-10-2020 de 2 de octubre de 2020, DRCC-060-10-2020 de 2 de octubre de 2020, DRCC-061-10-2020 de 2 de octubre de 2020, y DRCC-057-10-2020 de 19 de julio de 2021.

13. Comunidad Indígena Originaria Chuquiñapi
14. Cormet Inc.
15. Earthworks
16. Ecologistas en Acción
17. EcoNexus
18. El Observador GT
19. Environmental Network for Central America (ENCA)
20. European Trade Justice Coalition
21. Fridays4Palestine
22. Friends of the Earth Canada
23. Genesee Valley Citizens for Peace
24. GeoComunes A.C.
25. Global Justice Now
26. Global Witness
27. Grand Mothers Advocacy Network
28. Greenpeace Canada
29. Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA
30. Institute for Policy Studies - Global Economy Program
31. KAIROS Victoria
32. Latin American Canadian Solidarity Association (LACASA)
33. Malach Consulting
34. Maquila Solidarity Network
35. Mining Injustice Solidarity Network
36. MiningWatch Canada
37. Movimiento Indígena Maya Peninsular
38. Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas
39. Observatorio de Industrias Extractivas
40. Otros Mundos Chiapas
41. Partner Indonesai
42. Patagonia Area Resource Alliance
43. People's Health Movement-Canada
44. Poets, Artists, Mothers
45. PowerShift
46. Qhana Pukara Kurmi
47. Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
48. Rights Action
49. Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes
50. Rochester Committee on Latin America
51. Save Our Sperrins (SOS)
52. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de America Latina —
Oscar Arnulfo Romero (SICSAL-OAR)
53. Simcoe County Honduras Rights Monitor
54. Securing Indigenous Rights in the Green Economy Coalition (SIRGE)
55. SoCal 350 Climate Action

56. Task Force on the Americas
 57. Terra Justa
 58. Victoria Central America Support Committee
 59. Victoria Peace Coalition
 60. WALHI South Sulawesi
-

June 15, 2026

Dear President Raúl Mulino;
Minister of Commerce and Industry Juan Moltó, and;
Minister of the Environment Juan Carlos Navarro

We, the undersigned international organizations, are deeply concerned about the possible reopening of the Cobre Panamá mine. The mine, owned by the Canadian mining company First Quantum Minerals, has been suspended since November 2023, when the Supreme Court of Justice in Panama [ruled](#) that the mine's contract was unconstitutional. Due to widespread public opposition to the mining industry in the country and its harmful effects, Panama's then President, Laurentino Cortizo, enacted a mining [moratorium](#) prohibiting the approval of new mining contracts.

In the early months of [2024](#), several mining companies and suppliers began to resort to the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system. This system allows transnational corporations to sue the state when they feel their interests have been harmed by measures taken by state agencies. Their goal is to demand compensation for their investments, as well as for their expected future profits. Arbitration proceedings or the threat of arbitration can unfairly influence or pressure the state into reversing its decisions or making decisions that favor their businesses. This is known as the "chilling effect," because they can paralyze government decisions considered harmful to their interests, regardless of whether these decisions are in favor of the environment or the common good. Transnational corporations can resort to arbitration even when they have been sanctioned by the country's courts, as is the [case](#) with the Cobre Panamá mine.

In this case, lawsuits totaling more than \$25 billion are currently pending from the Canadian companies [First Quantum Minerals](#) and [Franco Nevada](#), as well as the South Korean company Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources ([KOMIR](#)). In response to these multimillion-dollar lawsuits, Panama's new president, José Raúl Mulino, [said](#) he would be willing to negotiate with First Quantum Minerals if they withdrew their lawsuit. This is highly concerning and demonstrates how this arbitration mechanism is being used to force negotiations under duress, with the aim of undermining the authority and 2023 ruling of the Supreme Court, and to violate the will of the Panamanian people, who have repeatedly made clear that harmful mining is not the kind of development they want in their country.

The operations of First Quantum Minerals and its partners in the country have sparked nationwide [protests](#), two court [rulings](#) against their contracts, human rights [violations](#), and several penalties for environmental violations². Despite this, they are attempting to pressure the Panamanian government to reopen the mine by using an exclusive and unfair arbitration system. In this regard, David Boyd, during his tenure as the UN Special Rapporteur on human rights and the environment, [stated](#) that “ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” and has been “a [catastrophe](#) for the development, implementation, and enforcement of laws, regulations, policies, and environmental permitting decisions necessary to address the planetary crisis.”

For all these reasons, we call on the Panamanian government to:

1. Work with civil society and the communities surrounding First Quantum Minerals’ concession to develop a safe and definitive closure plan for the Cobre Panamá mine;
2. Respect the 2023 Supreme Court ruling and the mining moratorium, and insist that mining companies operating in the country, such as First Quantum Minerals, also respect national laws. This includes denying a new contract or reopening under any other administrative model;
3. Reject any avenue that attempts to reopen the mine, be it through billion-dollar lawsuits meant to pressure the government to negotiate or any other means.

For several years now, the Panamanian people have made clear their opposition to mining in the country. The Panamanian government must respect the will of the people and ensure compliance with the decisions of the Supreme Court, the laws it has sovereignly enacted, as well as the mining moratorium and its regulations.

Sincerely,

1. Asamblea Jáchal No Se Toca
2. Attac Québec
3. Balance & Accuracy in Journalism
4. Bios Iguana A.C.
5. Canadian Network for Corporate Accountability
6. Climate Action Network Canada (CAN-Rac)
7. CoDevelopment Canada
8. Coal Action Network
9. Colectivo CASA
10. Colectivo Voces Ecológicas (Covec)

² Resoluciones DRCC-053-10-2020 de 1 de octubre de 2020, DRCC-057-10-2020 de 1 de octubre de 2020; DRCC-056-10-2020 de 1 de octubre de 2020, DRCC-059-10-2020 de 2 de octubre de 2020, DRCC-062-10-2020 de 5 de octubre de 2020, DRCC-064-10-2020 de 5 de octubre de 2020, DRCC-054-10-2020 de 1 de octubre de 2020, DRCC-058-10-2020 de 2 de octubre de 2020, DRCC-060-10-2020 de 2 de octubre de 2020, DRCC-061-10-2020 de 2 de octubre de 2020, y DRCC-057-10-2020 de 19 de julio de 2021.

11. Columbia Center on Sustainable Investment
12. Common Frontiers
13. Comunidad Indígena Originaria Chuquiñapi
14. Cormet Inc.
15. Earthworks
16. Ecologistas en Acción
17. EcoNexus
18. El Observador GT
19. Environmental Network for Central America (ENCA)
20. European Trade Justice Coalition
21. Fridays4Palestine
22. Friends of the Earth Canada
23. Genesee Valley Citizens for Peace
24. GeoComunes A.C.
25. Global Justice Now
26. Global Witness
27. Grand Mothers Advocacy Network
28. Greenpeace Canada
29. Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA
30. Institute for Policy Studies - Global Economy Program
31. KAIROS Victoria
32. Latin American Canadian Solidarity Association (LACASA)
33. Malach Consulting
34. Maquila Solidarity Network
35. Mining Injustice Solidarity Network
36. MiningWatch Canada
37. Movimiento Indígena Maya Peninsular
38. Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas
39. Observatorio de Industrias Extractivas
40. Otros Mundos Chiapas
41. Partner Indonesai
42. Patagonia Area Resource Alliance
43. People's Health Movement-Canada
44. Poets, Artists, Mothers
45. PowerShift
46. Qhana Pukara Kurmi
47. Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
48. Rights Action
49. Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes
50. Rochester Committee on Latin America
51. Save Our Sperrins (SOS)
52. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de America Latina —
Oscar Arnulfo Romero (SICSAL-OAR)
53. Simcoe County Honduras Rights Monitor

54. Securing Indigenous Rights in the Green Economy Coalition (SIRGE)
55. SoCal 350 Climate Action
56. Task Force on the Americas
57. Terra Justa
58. Victoria Central America Support Committee
59. Victoria Peace Coalition
60. WALHI South Sulawesi